



**PROCESO:** ACCIÓN DE TUTELA  
**RADICACIÓN:** 2024-00206  
**ACCIONANTE:** ANNA CRISTINA QUIROZ ROSERO  
**ACCIONADA:** EPS SANITAS S.A.S., ARL AXA COLPATRIA y FONDO DE PENSIONES PORVENIR

**INFORME SECRETARIAL:** San Juan de Pasto, 27 de junio de 2024. Señora Juez, a su despacho la presente acción de tutela de la referencia, informando que correspondió por reparto a través de la Oficina Judicial en fecha 27 de junio de la presente anualidad y se encuentra pendiente por resolver su admisión. Sírvasse proveer.

**JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PASTO, veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024).**

Visto el informe secretarial que antecede, se vislumbra solicitud de amparo constitucional instaurada por ANNA CRISTINA QUIROZ ROSERO, mediante apoderado judicial, contra la EPS SANITAS S.A.S., la ARL AXA COLPATRIA y el FONDO DE PENSIONES PORVENIR por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de debido proceso, trabajo, seguridad social, vida digna, mínimo vital y salud consagrados en nuestra Constitución Nacional.

De otra parte, obra una petición de medida provisional, consistente en que “SE ORDENE EL TRASLADO DE LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL MUNICIPIO DE PASTO O EN SU DEFECTO IPIALES. EN CUANTO A LA MEDIDA PROVISIONAL Y/O SE ACATEN RECOMENDACIONES MEDICAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO MEDIANTE LA MODALIDAD DE TRABAJO EN CASA”.

Sobre este último aspecto, se debe aclarar que el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, dispone en su artículo 7º: “*Medidas provisionales para proteger un derecho [...] El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso*”.

Así mismo, es preciso señalar que la honorable Corte Constitucional, en cuanto a los requisitos para decretar la medida provisional en Auto No. 259 de 2021, precisó:

*“Recientemente, la Sala Plena reinterpretó estos requisitos y los sintetizó en tres exigencias básicas. De acuerdo con esta reformulación, la procedencia de la adopción de medidas provisionales está supeditada al cumplimiento de los siguientes presupuestos:*

- (i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris).*
- (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho*



*invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora).*

*(iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente”.*

Con apuntalamiento en lo anteriormente expuesto, considera el despacho que la medida solicitada debe ser negada. Lo anterior, debido a que dentro del expediente no hay ningún elemento que pueda sustentar la urgencia que es el fundamento para la imposición de la medida.

Igualmente, se observa que la pretensión de traslado y/o la concesión de la modalidad de trabajo en casa, deprecada por vía de medida provisional, en esencia es la misma que deberá ser estudiada a instancias de la sentencia. De ahí que, de accederse a la misma, se emitiría una decisión, sin que se permita a la contraparte ejercer su derecho de defensa, lo que no es dable de realizarse por la vía solicitada.

En consecuencia, no se extracta que exista un peligro inminente que pueda ocasionar un perjuicio irremediable o vulneración de derechos fundamentales de la actora y que puedan ser agravados durante el trámite de la acción de tutela, que amerite la medida de protección inmediata reclamada.

Ahora bien, adentrándonos de nueva cuenta al análisis de la tutela, es menester señalar que es posible que las órdenes que se puedan emitir, involucren responsabilidad en otras entidades diferentes a las accionadas, por lo que se procederá con la vinculación a este proceso al BANCO DE MICROFINANZAS BANCAMIA y al AGENTE INTERVENTOR DE LA EPS SANITAS S.A.S., a fin de que ejerzan su derecho de defensa y contradicción.

En consecuencia, por estar ajustada la acción impetrada a los requisitos mínimos exigidos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: ADMITIR** la presente Acción de Tutela instaurada por ANNA CRISTINA QUIROZ ROSERO, mediante apoderado judicial, contra la EPS SANITAS S.A.S., la ARL AXA COLPATRIA y el FONDO DE PENSIONES PORVENIR.

**SEGUNDO: NEGAR** la medida provisional solicitada por ANNA CRISTINA QUIROZ ROSERO, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

**TERCERO: VINCULAR** al presente trámite constitucional al BANCO DE MICROFINANZAS BANCAMIA y al AGENTE INTERVENTOR DE EPS SANITAS S.A.S., a fin de que ejerzan su derecho de defensa y contradicción.

**CUARTO: OFICIAR** a las accionadas y a las vinculadas al presente trámite, para que en el término perentorio e improrrogable de dos (2) días, contados



a partir de la notificación del presente proveído, informen a este Despacho sobre los hechos y pretensiones plasmadas en el escrito de tutela.

**QUINTO: RECONOCER** al abogado BRAYAN GEOVANNY JATIVA RAMOS, con cédula de ciudadanía No. 1.085.294.986 y T.P. No 285.615 del C.S. de la J., como apoderado judicial de la accionante ANNA CRISTINA QUIROZ ROSERO.

**SEXTO: NOTIFÍQUESE** el presente proveído por el medio más expedito.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**IVONNE MARITZA GÓMEZ MUÑOZ**  
JUEZ SEGUNDA DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PASTO